

El precandidato opositor permanece en estado crítico:

Gobierno vincula ataque contra senador a red criminal y resurge el temor por los magnicidios

La fiscalía investiga la posible participación de bandas como el ELN, la Segunda Marquetalia y otras disidencias, en medio de un aumento de la violencia en el país.

EVA LUNA GATICA

Las sospechas sobre el atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, apuntan al crimen organizado, confirmó ayer el gobierno, y hace resurgir al fantasma de los magnicidios que hace más de 20 años marcaron la vida política de Colombia.

“(Miguel) continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”, señaló ayer la Clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde Uribe Turbay, de 39 años y del opositor partido Centro Democrático, está hospitalizado desde el sábado, tras ser atacado a tiros por la espalda mientras daba un discurso en un parque de Fontibón, en el oeste de la capital. El sospechoso de ser el autor material del ataque es un joven de 15 años que fue detenido en el momento. Pero después, se desplegó un amplio operativo de investigación, con más de 250 agentes, para esclarecer quiénes son los autores intelectuales del crimen y cuál podría ser el móvil del ataque.

“No se descarta la participación de grupos armados, grupos de delincuencia común, organizada y mafias como la ‘junta del narcotráfico’ y también otros actores ocultos”, señaló en una conferencia el domingo el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. Mientras que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, agregó ayer que la investigación avanza con cuatro líneas de indagación activas, entre ellas la posible participación de estructuras criminales como el ELN, la Segunda Marquetalia y otras disidencias, consignó el medio El Colombiano.



EL SENADO de Colombia suspendió las deliberaciones programadas ayer en solidaridad con el legislador Miguel Uribe Turbay. En la foto, su asiento cubierto con una bandera.

El presunto responsable del ataque, en tanto, será imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Uno de los elementos clave de la investigación es el arma de fuego que utilizó el menor, una Glock de 9 mm, que según el análisis balístico, fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Texas, Arizona, Estados Unidos. Se está indagando si fue utilizada en otros crímenes.

La prioridad, según la fiscal general, es identificar si el menor fue contactado como sicario por un grupo estructurado. En Colombia, los menores de 18 años no es-

tán sometidos a las mismas sanciones que los mayores de edad, y “muchas veces es por esto que son instrumentalizados”, indicó Camargo, que agregó que el menor podría pagar hasta ocho años de pena en un centro de reclusión para adolescentes.

El joven —internado en una clínica en Bogotá, ya que resultó herido en un intercambio de disparos durante el ataque— confesó que recibió instrucciones y una suma de dinero por cometer el delito, de parte de un hombre vinculado a la “olla”, un término popular en Colombia que se usa para referirse a un lugar donde

se vende droga.

El Presidente Gustavo Petro dijo ayer que el menor estuvo en programas gubernamentales de ayuda a jóvenes de zonas vulnerables, en los que “demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”.

Incremento de la inseguridad

El ataque contra Uribe Turbay ocurre en medio de un fuerte aumento de la inseguridad y de la violencia criminal en el país. Entre enero y marzo se registraron

Expresidente Uribe denuncia amenazas

El expresidente colombiano Álvaro Uribe denunció ayer que fue informado por “inteligencia internacional” sobre la supuesta preparación de un atentado en su contra, al tiempo que criticó al gobierno de Gustavo Petro por, según él, no concentrarse en la gravedad del ataque contra Miguel Uribe Turbay. “Mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros temas. (...) Y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra”, escribió en X el exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Uribe ha sufrido varios atentados durante su vida pública. Uno de los más graves fue en 2002 en Barranquilla cuando siendo candidato presidencial, un bus bomba explotó al paso de su vehículo blindado. El ataque dejó cuatro muertos.

3.244 asesinatos intencionales, un aumento de 70 casos respecto de 2024, según datos del Ministerio de Defensa, mientras que entre enero y abril se denunciaron más de 131 casos de secuestro, la cifra más alta en casi 15 años, solo superada por la del segundo cuatrimestre de 2011.

Asimismo, la ONU detalló ayer que más de 950.000 personas han sido afectadas, con toques de queda y otras restricciones a su movilidad, por la violencia y el conflicto armado entre enero y abril de este año, cuatro veces más que en 2024. A la vez, se registró una alza significativa en la producción de drogas: un 53% más entre 2023 y 2024.

“El conflicto colombiano es tan complejo que resulta imposible pensar en un único actor interesado en desestabilizar el país, sobre todo, dado el fracaso de la política de Paz Total de Petro. En ese sentido, desde guerrillas hasta sectores civiles radicalizados pueden ser los autores intelectuales del crimen”, comenta Alexander Rojas, profesor y analista político de la Universidad El Bosque.

Preocupación por violencia política

Junto a la inseguridad, Colombia también atraviesa una fuerte parálisis política, con el Presidente enfrentado al Parlamento por la no aprobación de sus propuestas, y que lo han llevado a aumentar sus críticas contra la oposición.

“La incapacidad para gobernar ha llevado a una radicalización del populismo de Petro”, dice Ro-

jas, lo que según Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, ha generado un clima de “extrema polarización en Colombia, donde el propio Presidente ha llamado a sus detractores ‘nazis’, ‘fascistas’, ‘obstruccionistas’ y ‘obstáculos que deberían de ser borrados’ (...) lo que no ayuda a unir a la sociedad”.

Según Guzmán, además, el ataque “va a cambiar la forma de hacer campaña”, y que las candidaturas políticas de 2026, cuando son las elecciones presidenciales, están en mayor riesgo de lo que estaban anteriormente”, asegura. Esto, refleja un aumento de la preocupación en torno a la violencia política.

En el pasado ha cobrado la vida de varios aspirantes presidenciales. En la campaña de 1990, por ejemplo, murieron tres candidatos: Luis Carlos Galán Sarmiento (agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, en marzo y abril de 1990, respectivamente. A esto se suma el asesinato del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, quien también había sido candidato en 1990, y que fue asesinado en 1995.

El propio Uribe Turbay ya había vivido de cerca la violencia del narco. El congresista más votado en las elecciones de 2022 y nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), es hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada por un grupo de narcotraficantes del que era parte el capo Pablo Escobar, y falleció en 1991 en medio de un rescate policial.